



NUE 243-A-2018 (OC)

Beltrán de Palacios contra Municipalidad Monte San Juan

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las trece horas con cuarenta y cinco minuto del dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve.

Descripción del caso

Felicita Beltrán de Palacios, apeló de la resolución emitida por el Oficial de Información de la **Municipalidad de Monte San Juan**, que denegó el acceso a la información consistente en:

i. Copias simples de las actas números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, diez, once y doce del referido Concejo Municipal.

ii. Copia de los Acuerdos Municipales tomados en actas números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce

El oficial de información de la **Municipalidad Monte San Juan** resolvió que según lo establecido en el artículo 125 letra d) del Código Municipal (CM) el cual establece en su inciso tercero que en el caso de acuerdos municipales tendrán acceso a la información contenida en ellos, aquellos ciudadanos que directamente resulten afectados por los mismos, asimismo argumentó que los acuerdos solicitados únicamente se entregaran mediante copias certificadas en relación a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

En ese orden de ideas, la oficial de información expresó que se hará entrega en físico de las actas certificadas del Concejo, cobrando para ello una tasa de \$8.00 más el 5% de fiestas patronales, sumando con ello un valor de \$8.40 por cada certificación según lo regulado en las reformas de las Ordenanzas de tasas por servicios municipales de Monte San Juan, publicado en el Diario Oficial Tomo No. 389 en fecha 15 de diciembre de 2010.



El Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada Silvia Cristina Pérez para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. Posteriormente, el procedimiento fue reasignado a la Comisionada **Olga Noemy Chacón de Hernández**.

Durante la instrucción de este recurso, la Comisionada presentó un informe en el que expresó que, luego de analizar el objeto y la causa de este procedimiento, se determinó que el caso constituye un asunto de mero derecho; es decir, a la aplicación de normas y principios de la LAIP, que para resolver la controversia basta con el análisis de lo anterior; por lo que, se prescinde de la realización de la audiencia oral.

Análisis del caso

Para el caso en concreto, es importante analizar lo siguiente: I) Vigencia del Art. 125 literal g) del CM en el contexto de la LAIP; II) naturaleza de la información solicitada; y, finalmente, III) Desarrollo del principio de gratuidad.

I. Es pertinente analizar la vigencia del Art. 125 Inciso final del CM (Decreto Legislativo N° 929, del 20 de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial N° 12, Tomo N° 370, del 18 de enero de 2006), frente a la vigencia de la LAIP (Decreto Legislativo n° 534, de 30 marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial n° 70, Tomo n° 391, de 8 de abril de 2011).

La LAIP en su Art. 4 letra “a” establece el principio de máxima publicidad, como rector del acceso a la información pública, que demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones; de la misma forma, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano.

En ese orden de ideas, para garantizar el principio de máxima publicidad y de disponibilidad (Art. 4 letra “b” de la LAIP), el legislador salvadoreño configuro procedimientos sencillos y expeditos, que faciliten el alcance de la información pública a toda persona.

Enfocada a ese mismo propósito, la LAIP a través de su art. 110 derogó tácitamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que contraríen las reglas o principios creados por la dicha normativa, dejando expresamente vigente las disposiciones jurídicas ahí enunciadas, tal criterio es compartido por la Sala de lo Constitucional.

En esa línea, el Art. 125 parte final del CM, no se encuentra enunciado en las disposiciones vigentes del Art. 110 de la LAIP, por lo que, al realizar el análisis de compatibilidad, con el Art. 10 y 17 de la LAIP, referente a la información pública oficiosa, se concluye una clara contradicción con las mismas, por lo que dicha disposición se encuentra derogada tácitamente por la LAIP; en ese sentido, no puede ser utilizada para limitar el Derecho de Acceso a la Información pública (DAIP) de la personas.

II. Como parte del contenido del DAIP -Art. 2 de la LAIP-, encontramos el principio de máxima publicidad, regulado en el Art. 5 LAIP, en virtud del cual, en caso de duda sobre si una información es pública o está sujeta a reserva o confidencialidad, deberá entenderse como pública. Lo anterior, se justifica en que este principio es rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, lo que permite un desarrollo y puridad de la democracia informativa que debe fomentar el Estado.

En cuanto a la **información pública** el Art. 6 letra "c" de la LAIP establece que es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial.

Con relación a este tipo de información y de conformidad al principio de transparencia activa, existe cierto tipo de información pública que tiene que estar disponible, completa y actualizada para toda persona sin necesidad que se realicen solicitudes de información para obtenerla, surgiendo así la categoría de **información pública oficiosa**, la cual se encuentra desarrollada en el Art. 10 de la LAIP.

Asimismo, este Instituto ha establecido que la **información pública oficiosa** se pondrá a disposición del público por cualquier medio, tales como páginas electrónicas, folletos, periódicos u otras publicaciones; en este sentido, ningún ente obligado por la LAIP podrá



negar información de este tipo con el pretexto de no contar con los medios idóneos para compartirla.

En consecuencia, es pertinente afirmar que todos los requerimientos de la solicitud presentada por la ciudadana constituyen **información pública oficiosa**, pues todos los ítems se enmarcan en el artículo 17 de la LAIP. Por ello, el Oficial de Información de la **Municipalidad de Monte San Juan** no puede exonerarse de su obligación de conceder el acceso a lo solicitado alegando que los acuerdos municipales únicamente pueden ser solicitados por ciudadanos que directamente resulten afectados por estos, como lo establece el Art. 125 parte del CM, pues como ya mencionó se encuentra derogado tácitamente por la LAIP. Asimismo, este tipo de información debe estar a disposición de la población sin la necesidad de realizar una solicitud para ello; por lo que, es obligación de la **Municipalidad de Monte San Juan** tener la información actualizada y al alcance de la población.

En ese sentido, el ente obligado no puede ampararse en el Código Municipal para sostener que la información relativa a los acuerdos municipales solo puede ser entregada a personas que se pueden ver afectados, pues como se ha mencionado anteriormente por este Instituto en la resolución 213-A-2016 emitida el 21 de septiembre de 2016, los acuerdos municipales pueden ser solicitados por cualquier persona; es decir, que no necesitan encontrarse involucrados en ellos para realizar dicho requerimiento al oficial de información de cualquier municipalidad del país.

Por tanto, no ha quedado acreditada alguna imposibilidad legal para su entrega, razón por la que es oportuno **revocar la decisión de la Oficial de Información del ente obligado y ordenar su entrega.**

III. A continuación resulta oportuno realizar un análisis en torno al **Principio de Gratuidad** como característica del proceso de acceso a la información.

El Art. 4 letra “g)” de la LAIP regula el **Principio de Gratuidad** como parte de los principios rectores al momento de interpretar y aplicar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). El mismo artículo establece que “el acceso a la información debe ser gratuito”. Tenemos así que, “este principio va en función de que toda la información que esté en posesión de los sujetos obligados por la LAIP, es considerada como un bien público, por

lo tanto, toda persona que desee ejercitar este derecho debe tener acceso a la información de manera gratuita, sin que esto impida que el sujeto obligado pueda cobrar una cuota de recuperación por la reproducción de la información, dejándose la opción de la consulta directa por parte del solicitante.”¹

El Art. 61 de la LAIP desarrolla la “Gratuidad”, a su vez, como característica del procedimiento de acceso a la información, siendo así que la ley permite un acceso directo y libre de costos para la obtención y consulta de la información.

Entonces, la gratuidad radica en que la ley no estipula ni regula un costo para que un ciudadano interponga una solicitud de información o pueda tener acceso a la información de carácter e interés público en manos de los entes obligados. En ese sentido este principio debe entenderse como **una garantía estipulada en la ley para el ejercicio del derecho de acceso a la información.**

Ahora bien, esto no significa que en caso que una persona necesite que la información solicitada conste por medios impresos, copias simples o certificadas u otro pertinente, sea el ente obligado quien deba sufragar los costos que genere **la reproducción de dicha información.**

Por ello, el legislador estipula expresamente en el inciso segundo del Art. 61 LAIP que “la reproducción y envío de la información, en su caso, será sufragada por el solicitante”. Dichos costos de reproducción deberán estipularse con anterioridad por el ente obligado y estar a disposición para su consulta en hojas informativas. En el mismo orden, el inciso tercero establece que: “En caso de copias certificadas, se aplicarán las tasas previstas en las leyes especiales”.

El mismo artículo continúa detallando los casos en que la información será gratuita: “el envío por vía electrónica no tendrá costo alguno”; y, el inciso cuarto: “tratándose de copias magnéticas o electrónicas la reproducción será gratuita”. Es importante tomar en

¹ Gómez Gallardo, P. “El Derecho de Acceso a la Información Pública en el distrito federal”, México DF, (P.134). Desde el mes de Noviembre de 2013 se desempeña como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).



cuenta que existen diferencias entre dar acceso libre y gratuito a la información y en que la reproducción de la información no genere algún costo para su entrega y/o envío.

En ese orden, la reproducción será gratuita únicamente cuando el solicitante requiera la entrega de la información en versión magnética o electrónica, ya sea por correo electrónico o si el interesado aporta un medio tecnológico de almacenamiento para su entrega (memorias extraíbles, USB, micro SD, etc.), atendiendo la integración y promoción del uso de las tecnologías de la información y comunicación y la implementación del gobierno electrónico, según el Art. 3 letra “g)” de la LAIP y 61 inc. 2 y 4.

Para el objeto del presente recurso de apelación, la apelante en su solicitud de información, de fecha 22 de octubre de 2018, requirió que la información se le entregara en copias simples, por lo que **el ente obligado debe atender expresamente a la forma o modalidad en que la solicitante le requirió la entrega de la información;** asimismo en razón de lo dispuesto en el artículo 66 letra “d)” de la LAIP, le otorga las facultades a las personas de elegir el medio que sea más idóneo para ellos.

En ese sentido, este Instituto considera pertinente realizar un breve análisis, ya que en la resolución emitida el 16 de noviembre de 2018, por el Oficial de Información este argumentó que la entrega de la documentación solicitada se realizaría por medio de copias certificadas, las cuales tendrán un valor de \$ 8.00 más el 5% de las fiestas patronales sumando un valor de \$ 8.40 por cada copia certificada; sin embargo, el día 28 de mayo de 2019 el ente obligado presentó el informe de ley a través del Alcalde de la municipalidad en el que ratifico su postura en lo relacionado al Art. 71 inciso 3º de la LAIP, no obstante modificó su decisión en cuanto a la entrega de la información por medio de copias certificadas, ya que en el informe en el apartado IV expresó que se podrá proporcionar lo solicitado en fotocopias simples cancelando el valor de \$ 0.10 centavos de dólares de los Estados Unidos de América, más el 5% de las fiestas patronales, según lo publicado en el Diario Oficial Tomo número 389, de fecha 15 de diciembre de 2010.

De lo anterior, este Instituto advierte que dicha decisión, se encuentra acorde al Principio de Gratuidad por parte del ente obligado al indicar el monto de los costos de reproducción en relación a la información que expresamente se le ha solicitado porque en

caso de generar costos, estos deben ser sufragados por el solicitante ya sea en atención a lo dispuesto en hojas informativas que detallen dichos costos o en atención a las tasas ya previstas en leyes especiales u Ordenanza de Tasas por Servicios en el caso de las Municipalidades.

Decisión del caso

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 6 y 18 de la Cn., 94, 96 letra d. y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve:**

a) Revocar la resolución emitida por el oficial de información de la **Municipalidad de Monte San Juan**, de fecha 16 de noviembre de 2018.

b) Ordenar a la **Municipalidad de Monte San Juan**, que a través de su Oficial de Información, entregue en el plazo de **tres días hábiles** contados a partir del día siguiente de notificada esta resolución, a **Felicita Beltrán de Palacios**, la información relativa a: *i)* Copias simples de las actas números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, diez, once y doce del referido Concejo Municipal; *ii)* Copia de los Acuerdos Municipales tomados en actas números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, en formato de copia simples.

c) Ordenar a la **Municipalidad de Monte San Juan**, que a través de su oficial de información, entregue en el plazo de **tres días hábiles** contados a partir del día siguiente de notificada esta resolución, a **Felicita Beltrán de Palacios**, la información concerniente a: *i)* Copias simples de las actas números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, diez, once y doce del referido Concejo Municipal; *ii)* Copia de los Acuerdos Municipales tomados en actas números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, debiendo **Felicita Beltrán de Palacios** sufragar los costos razonable de reproducción de la información.

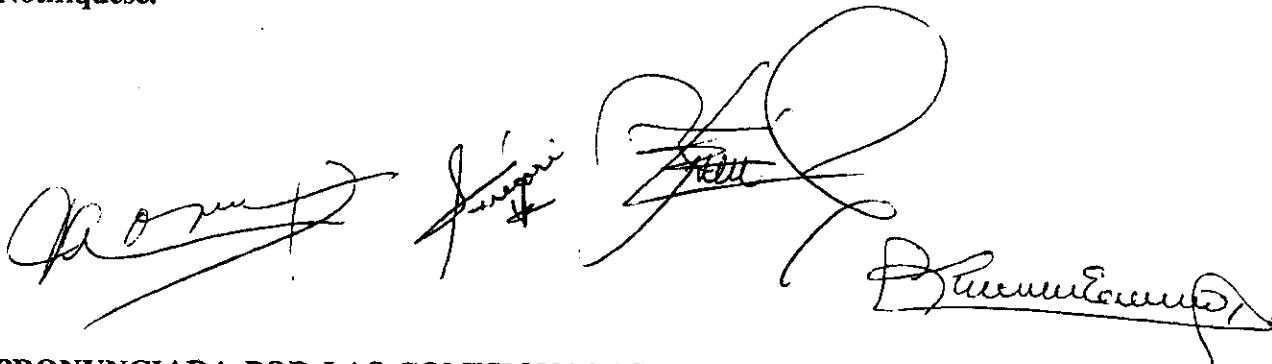
d) Requerir a la **Municipalidad de Monte San Juan** que, en el plazo de **veinticuatro horas**, luego de concluido el plazo anterior, remita informe de cumplimiento

de las obligaciones contenidas en las letras b) y c) de la presente resolución. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección oficialreceptor@iaip.gob.sv.

e) **Remitir** este expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para que verifique su cumplimiento.

f) **Publicar** esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-



**PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA
SUSCRIBEN**

MC/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.



José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP

